

A PUNTA DE PISTOLA

Sueños democráticos e intervenciones armadas

DAVID
RIEFF

DEBATE

www.megustaleer.com

A punta de pistola

David Rieff

Traducción de
Ricard Martínez i Muntada

Este libro está dedicado a mi madre, Susan Sontag

Qui veut faire l'ange, fait la bête.

PASCAL

Agradecimientos

En un año que ha sido difícil en muchos aspectos, me doy cuenta de que en mi vida profesional he sido más afortunado de lo que cualquiera merece ser. Aunque no empecé con ninguna de las dos, durante casi toda mi carrera Simon & Schuster ha publicado mis trabajos y la Agencia Wylie me ha representado. Nunca las dejaría voluntariamente ni a una ni a otra. Ahora bien, a estas alturas, las personas a quienes quiero expresar particularmente mi agradecimiento, Alice Mayhew y Rober Labrie de S&S, y Andrew Wylie, Sarah Chalfant y Tracy Bohan de Wylie, ya son mucho más que colegas. Sin embargo, lo que tengo que decir sobre ellos como amigos es demasiado personal para manifestarlo aquí. Por lo tanto, les doy gracias como colegas, mentores, críticos y suministradores de sabios consejos y de ayuda cuando ha sido necesario, aunque soy completamente consciente de que este agradecimiento es una recompensa escasa por todo lo que han hecho por mí. No me habría atrevido a convertirme en escritor sin la fe infatigable de Andrew Wylie en mi trabajo; no habría escrito los libros que he escrito sin Alice Mayhew.

Un libro que reúne varios trabajos es un artefacto extraño. A diferencia de un libro «normal», es producto de muchas manos editoras. También en este caso doy gracias por la buena suerte que ha supuesto trabajar con Leon Wieseltier de *The New Republic*, el difunto James Chace de *The World Policy Journal* cuando yo era subdirector de la publicación, Steve Wasserman de *Los Angeles Times Book Review*, y, en tiempos más recientes, Monika Bauerlein de *Mother Jones*, David Goodhart y Alex Linklater de *Prospect* y Enrique Krauze y Julio Trujillo de *Letras Libres*. Quienes los conocen tal vez distingan en estos artículos su mano, que ha servido para mejorarlos. Sin embargo, el núcleo de este libro es mi trabajo periodístico referente a Irak, sobre todo el que he desarrollado durante los dos

últimos años para *The New York Times Magazine*. He sido durante tanto tiempo escritor *free lance* que ha resultado extraño hallar un hogar después de todos estos años. Sin embargo, en el *Magazine* he llegado a sentirme como en casa. Por eso, por sus numerosas muestras de amabilidad, por su inteligencia y por su amistad, quería expresar mi gratitud al director del *Magazine*, Gerry Marzorati, y a mi responsable directo, Paul Tough.

Finalmente, quiero referirme en particular a mi ayudante, Claire Lundberg, sin la cual este libro nunca se habría publicado. Estoy en deuda con ella para siempre.

Hay un juego de salón inglés en el que se pide a los participantes que piensen en la frase que es *menos* probable que pronuncien. Una vez, hace mucho tiempo, llegué a la conclusión de que la mía debe ser: «No tengo opinión sobre eso». Ninguna página de agradecimientos está completa sin la asunción ritual de la culpa de todos los errores y la exención de los amigos de toda responsabilidad por las opiniones expresadas en la obra en cuestión. Evidentemente, reconozco que en mi caso ese descargo es probablemente innecesario, pero a pesar de todo lo presento, aunque solo sea para guardar las formas.

Prólogo

Cualesquiera que sean mis limitaciones y defectos como escritor, a lo largo de toda mi carrera me ha parecido que, por lo menos, sabía lo que pensaba. *A punta de pistola* señala el final de esa pretensión. Este es un libro concebido más a partir del temor que de la esperanza y profundamente marcado por mi propia revisión de muchas de las posiciones que había adoptado durante la década de 1990 a favor de lo que de modo un tanto equívoco denominamos «intervenciones humanitarias» (probablemente «intervenciones por los derechos humanos» sería un término más preciso). Lo que me hizo cambiar de opinión no fue el pesar por una intervención concreta. Nada de eso: todavía creo que en ocasiones no hay alternativa a la intervención militar desde el exterior para poner fin a la masacre; y, por citar solo los dos ejemplos más obvios, aún sostengo que la OTAN hizo bien en intervenir en Bosnia, aunque fuera tardíamente, del mismo modo que sigo lamentando que ninguna potencia exterior interviniera para detener el genocidio ruandés de 1994. Sin embargo, he llegado a la convicción de que las premisas morales del intervencionismo han cambiado radicalmente en la década transcurrida entre el fin de la guerra de Bosnia en 1995 y la caída de Bagdad en 2003, y ello, con franqueza, me aterra.

Lo que ha cambiado, según creo, es que hemos pasado de considerar tales intervenciones como respuestas *excepcionales*, que solo había que emprender en las circunstancias más extraordinarias (una vez más, acude a la mente Ruanda; debo añadir que, para mí, Bosnia no fue una cuestión humanitaria sino política), a contemplarlas como una respuesta fundamental —aunque no, claro está, la preferible— no solo a las matanzas en masa, sino también a los regímenes opresivos del mundo entero. Ya a principios de la década de 1990, algunos juristas internacionales habían empezado a hablar de

«una norma incipiente de intervención humanitaria». Al inicio del nuevo siglo, esa concepción ya se estaba ampliando en una medida extraordinaria. Tal vez no podía ser de otro modo, especialmente cuando las Naciones Unidas se habían revelado incapaces de actuar como la principal institución para la paz y la seguridad que sus fundadores habían imaginado que llegarían a ser. Sin embargo, ante ese dilema, la respuesta que pareció atraer a muchos intervencionistas progresistas (entre los cuales, repito, una vez me conté) fue abogar por la ampliación radical del alcance, por no hablar de la base legal, del intervencionismo.

La versión más extrema de ello ha sido el concepto de Alianza de Democracias defendido por antiguos responsables gubernamentales estadounidenses como Morton Halperin e Ivo Daalder, así como por George Soros. Daalder ha llegado incluso hasta el punto de insistir en que «la aceptación de la "responsabilidad de proteger" [la doctrina que compromete a los estados a intervenir cuando un país determinado no protege a su pueblo o comete graves crímenes contra él] abre la posibilidad de una nueva evaluación más genérica de cuándo hay que intervenir». De nuevo, el punto clave para mí es que lo que se proponía no era el empleo excepcional de la fuerza militar para detener las matanzas en masa, sino más bien la tesis de que, con el fin de atajar dichas masacres —que, en su inmensa mayoría, eran llevadas a cabo por gobiernos no democráticos o por estados denominados «fallidos»—, era necesario «democratizar» esos estados, por la fuerza si era preciso. Esa es, desde luego, la razón de que el subtítulo de *A punta de pistola* sea «Sueños democráticos e intervenciones armadas».

Daalder y muchos otros intervencionistas progresistas sostienen categóricamente que tanto Estados Unidos como otros países democráticos tienen un interés «primordial» en «promover las reivindicaciones de democracia liberal en el mundo». La palabra clave es «primordial», ya que un interés primordial es precisamente eso, el equivalente político del imperativo categórico de Kant, urgente e indiscutible. Combínese esa convicción filosófica con la percepción

de que en la actualidad el derecho internacional autoriza a los estados a actuar por su cuenta para acabar con las vulneraciones de los derechos humanos incluso sin sanciones (como lo expresó en una ocasión el juez Richard Goldstone, ex fiscal del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra para la antigua Yugoslavia, la guerra de Kosovo fue «ilegal» pero «legítima») y con la convicción por parte de los intervencionistas de que la justificación para la intervención puede ser no solo humanitaria, sino, como lo ha expresado Daalder, «unos acontecimientos [en el territorio de un país determinado] que amenacen a otros fuera de él», y uno tiene un programa para inacabables guerras altruistas. En mi opinión, las buenas intenciones de quienes adoptan esa posición —y la mayoría están motivados por las preocupaciones más serias y altruistas— no pueden justificar, pese a todo, dicha postura. Lo que esta augura, según creo, y por usar una frase que vi en una pancarta de la masiva manifestación contra la guerra celebrada en Londres antes de la invasión estadounidense, es la «guerra perpetua por la paz perpetua».

Parafraseando a Ernesto «Che» Guevara —un pensador obviamente mucho menos digno de ser tomado en serio que el Kant del credo visionario de *La paz perpetua*, pero que no obstante tenía buena mano para las consignas—, es como si los intervencionistas progresistas quisieran ahora crear no «una, [sino] dos, tres, muchas intervenciones de Kosovo». En esto, desde luego, hallan puntos en común con neoconservadores como Paul Wolfowitz. En efecto, la afirmación de que es crucial para la seguridad estadounidense y para el interés primordial del país fomentar la democratización ha sido la base de la política exterior de la administración Bush, por lo menos según se ha enunciado. Fue también el tema del segundo discurso de toma de posesión del presidente, una alocución sobre la cual William Schulz, presidente de la sección estadounidense de Amnistía Internacional, tuvo el valor de reconocer que «si cualquier presidente distinto de George Bush hubiera prometido vincular la política de Estados Unidos a la lucha por la "causa de la libertad", [a

los activistas por los derechos humanos les] dolerían las manos de aplaudir».

Personalmente, me ha parecido cada vez más manifiesto que esa idea central de comprometer a Estados Unidos en el fomento del cambio democrático en todo el mundo, a punta de pistola si no hay otra alternativa, une la posición internacionalista progresista y la posición neoconservadora de un modo que desconcierta a los conservadores y suele empujar a los intervencionistas progresistas a desgañitarse desmintiéndolo. Afirmar tal cosa —y esta es una de las preocupaciones centrales de este libro— no equivale bajo ningún concepto a decir que no hay diferencias importantes entre intervencionistas progresistas y conservadores. Por el contrario, cuestiones como el multilateralismo frente al unilateralismo y el excepcionalismo estadounidense frente a lo que John Ikenberry ha denominado el compromiso con «un orden internacional basado en reglas», son de enorme importancia. Sin embargo, a fin de cuentas, creo que esas discusiones se pueden considerar más como una riña familiar entre wilsonianos que como la expresión de dos modos auténticamente distintos de percibir el mundo. Ambos bandos dan por supuesto que Estados Unidos está en una posición excepcional para arreglar los males del mundo y también —un punto clave: en esto el excepcionalismo estadounidense parece común a ambos bandos— tiene la obligación moral de hacerlo.

Otro modo de plantearlo es que, con frecuencia, para los intervencionistas progresistas, Estados Unidos, con su enorme poder, forma a menudo parte del problema pero podría estar en el centro de la solución (muchas de las actuaciones políticas del Instituto para la Sociedad Abierta de George Soros me han parecido desde hace tiempo basadas en ese supuesto). Por su parte, los neoconservadores han insistido en que Estados Unidos, al romper con el «realismo» del padre del presidente Bush, George Herbert Walker Bush, y consejeros suyos como James Baker y Brent Scowcroft, y declarar que apoyará la democracia y estará al lado de los disidentes en lugar de sostener el *statu quo* en países como Egipto, se ha convertido ya en

esa solución. Si acaso, están perplejos de que los intervencionistas progresistas no hagan causa común con ellos. En considerable medida, y siguiendo el razonamiento planteado por William Schulz, debo confesar que también yo lo estoy.

Obviamente, ahora escribo en calidad de persona temerosa de esa marea intervencionista que en Estados Unidos parece dominar hoy tanto el pensamiento progresista como el conservador. La línea que separa los ideales del orgullo desmedido es siempre delgada, pero he llegado a la convicción de que, en el curso de la pasada década, norteamericanos de ambos lados de la divisoria política la han cruzado. Cuando la distinguida jurista internacional Anne-Marie Slaughter aprueba la nueva pauta de intervención humanitaria, cuando otros internacionalistas progresistas hablan de la responsabilidad de proteger, y cuando, a mi parecer en la misma línea, el presidente Bush declara que «la mayor esperanza para la paz en nuestro mundo es la expansión de la libertad a todo el mundo», me parece que casi puedo oír el orgullo desmesurado. También oigo agitarse el fantasma del colonialismo, el colonialismo del siglo XIX que se justificaba asimismo alegando motivos humanitarios.

Sí, «nuestras» intenciones son buenas. Sí, algunas intervenciones humanitarias han merecido la pena —piénsese en los británicos en Sierra Leona— o la habrían merecido —piénsese en Ruanda—, pero ello no hace que el proyecto la merezca, ni siquiera que sea posible, en realidad. Y la idea de que Estados Unidos, que tal vez no sea excepcional pero sin duda alguna es notable en muchos aspectos, tiene la capacidad o la sabiduría necesarias para promover la democracia por la fuerza ha llegado a parecerme la más peligrosa de las presunciones y el más completo de los espejismos. Contra ese espejismo, un espejismo que compartí en el pasado, argumenta este libro.

DAVID RIEFF,

Nueva York, noviembre de 2005

Introducción

La lógica del momento actual, según nos dicen los dirigentes de todo el espectro político estadounidense, desde George W. Bush a John Kerry, así como un abanico igualmente amplio de analistas políticos, desde defensores de un poder norteamericano «duro» como Robert Kagan hasta quienes ensalzan la utilidad del poder «blando» y las instituciones multilaterales como las Naciones Unidas —caso de Joseph Nye—, es de hegemonía norteamericana. Los estadounidenses se sienten incómodos con el término «imperio», y en muchos aspectos este no describe adecuadamente las realidades de la preponderancia de Estados Unidos en el mundo. Tal vez los defensores declarados de la vocación imperial de Estados Unidos —muchos de los cuales, como el historiador Niall Ferguson, son, curiosamente, británicos (¿no acabará nunca esa pretensión de «ser como Grecia para Roma»?)— no tengan la influencia que podría sugerir la atención que les prestan los medios de comunicación. Sin embargo, en el seno de la élite política parece existir un amplio consenso sobre el hecho de que, como lo ha expresado el historiador militar Eliot A. Cohen, «al final, hay muy poca diferencia si uno piensa en Estados Unidos como un imperio o como otra cosa, las alternativas reales son la hegemonía estadounidense ejercida con prudencia o insensatez, coherentemente o de modo irresponsable, sin riesgos o peligrosamente».

Se asocia a Cohen con el movimiento neoconservador de Estados Unidos, pero su opinión la suscribiría probablemente la mayoría de los miembros de la élite política norteamericana, aun cuando, por supuesto, discreparían, pongamos por caso, sobre la cuestión de si al uso del poder estadounidense en Irak por parte de la administración Bush le viene mejor la definición de prudente o la de insensato. Al fin y al cabo, fue la secretaria de Estado del presidente Bill Clin-

ton, Madeleine Albright, quien pidió que se usara el poderío norteamericano «con aliados si es posible, en solitario si es preciso»; y quienes defendieron la invasión estadounidense de Irak en 2003 contra las acusaciones de que era ilegal según el derecho internacional tenían sin duda razón al responder que de acuerdo con ese criterio la guerra de Kosovo en 1999 había sido asimismo ilegal.

Si el asentimiento del secretario general de la ONU, Kofi Annan, y el del Consejo de Seguridad de la misma institución no había sido un requisito en los Balcanes, ¿por qué era necesario en Oriente Próximo? Hay respuestas a ello, desde luego, y no es la menos obvia que la guerra de Kosovo contaba con el apoyo abrumador de los países de la región (siendo Grecia la previsible excepción), mientras que a la guerra en Irak se oponían prácticamente todos los países de Oriente Próximo, con la excepción de Israel. Sin embargo, la pregunta es pertinente y no puede pasarse simplemente por alto, en particular por parte de quienes apoyaron la intervención en Bosnia y Kosovo y se opusieron a la de Irak; es decir, gente como yo.

Por supuesto, en Estados Unidos el momento triunfalista con respecto a Irak pasó rápidamente. Casi nadie, ni siquiera los más acérrimos defensores del derrocamiento de Sadam Husein, seguiría afirmando hoy que lo que siguió a la caída del dictador iraquí fue el éxito incontenible que habían predicho antes de que empezara la guerra. Cabría haber esperado que el continuo derramamiento de sangre en Irak, las pruebas abrumadoras de que, aunque tal vez las tropas norteamericanas fueran bienvenidas cuando derrocaron al régimen baasista, pronto pasaron a ser vistas con hostilidad por un pueblo iraquí molesto por la ocupación estadounidense, y la constatación creciente —apoyada incluso por estadísticas del Departamento de Estado norteamericano que mostraban que hubo más incidentes terroristas en 2003 que en cualquier año anterior— de que el mundo no era en absoluto más seguro después de la Operación Libertad para Irak pese a lo que había prometido la administración Bush, hicieran flaquear la fe de la gente en la idea de la intervención

armada en nombre de la democracia, los derechos humanos y las necesidades humanitarias. Pero no ha sido así.

El entusiasmo del Congreso estadounidense, durante el verano de 2004, por declarar que la limpieza étnica en la región sudanesa occidental de Darfur constituía un genocidio en el sentido legal del término; la exigencia del candidato John Kerry de que el presidente Bush acudiera a la ONU y contribuyera a organizar una intervención militar humanitaria; el apoyo que esas peticiones recibieron en buena parte de Europa; la oferta tanto de Gran Bretaña como de Australia de enviar tropas para que participaran en cualquier despliegue «humanitario», todo ello atestiguó hasta qué punto la fe en la idea de imponer los derechos humanos o paliar los niveles de sufrimiento humano a punta de pistola seguía siendo poderosa y convincente. A pesar de Irak, parecía que había muchas personas, tanto en Europa occidental como, lo que es más importante, en Estados Unidos —de donde tendría que proceder el grueso de cualquier despliegue de tropas serio, por lo menos en el aspecto logístico—, que seguían suscribiendo el punto de vista de las intervenciones humanitarias enunciado en Chicago por el primer ministro británico Tony Blair en 1999, cuando sostuvo que «si podemos establecer y extender los valores de la libertad, el imperio de la ley, los derechos humanos y la sociedad abierta, ello beneficia también a nuestros intereses nacionales».

Es un argumento que el movimiento por los derechos humanos llevaba décadas sosteniendo y que reforzaba la campaña de dicho movimiento en favor de los derechos en el antiguo imperio soviético y también sus campañas contra la colaboración estadounidense con dictadores del Tercer Mundo, de Vietnam a El Salvador. Cuando fue adoptado durante la administración del presidente Jimmy Carter, que designó a activistas de los derechos humanos como Patricia Derian para cargos de alta responsabilidad en Washington, la derecha estadounidense se horrorizó. En 2004, momento en que escribo estas líneas, ese lenguaje es el sonsonete de esa misma derecha. Como lo ha expresado el vicesecretario de Defensa de Bush, Paul

Wolfowitz, a decir de muchos el arquitecto ideológico de la guerra de Irak, «si se deja a la gente en libertad para gobernar su país como le parezca adecuado, trataremos con un mundo muy favorable a los intereses estadounidenses».

En las lagunas de esa frase —¿quién «deja en libertad», y bajo qué condiciones?— uno percibe con todo su patetismo y con una sensación de espantosa inevitabilidad o predestinación, digna de una tragedia griega, el profundo error de cálculo y la confusión de los deseos con la realidad por parte de la administración Bush en lo relativo a las realidades del Irak de la posguerra y a los límites de lo que en realidad puede lograr el poder militar estadounidense. Y, aun siendo discutible, la justificación de los derechos humanos para la decisión de invadir Irak resiste un análisis minucioso mucho mejor que las falsas afirmaciones de que Sadam Husein poseía armas de destrucción masiva o la falsa convicción de que su derrocamiento reduciría el nivel de amenaza terrorista contra Estados Unidos.

Dado el ascenso de los derechos humanos a la condición de contexto moral general y fundamental del uso de la fuerza por parte de los países occidentales, probablemente ello no debería resultar sorprendente. En la actualidad, la opinión de que, por lo menos donde sea posible y, de modo ideal, tan a menudo como sea posible, no debe permitirse que sucedan desastres humanos o que afecten a los derechos humanos —una opinión compartida por figuras que por lo demás tienen poco en común, si es que tienen algo, en su visión del papel de las instituciones internacionales o la autoridad del derecho internacional, como Kofi Annan y Paul Wolfowitz— ya casi no es objeto de discusión entre los expertos en política exterior. En Estados Unidos, solo activistas de extrema izquierda, como Noam Chomsky, de extrema derecha, como Pat Buchanan, y quienes pertenecen a la cada vez más asediada escuela realista —en particular miembros del equipo de seguridad del presidente George Herbert Walker Bush, como el general Brent Scowcroft o el general William Odom (se tratara de Bosnia, de Irak o de la doctrina de prevención de George W. Bush, los responsables militares estadounidenses de